Globethics Repository

Guatemala

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Gálvez Borrell, Víctor
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-07-09 05:10:46
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/219127

Guatemala

Una democracia sinuosa

Víctor Gálvez Borrell

El triunfo del Frente Republicano Guatemalteco en las elecciones de finales de 1999, ha implicado el retorno al poder, en este caso por vía democrática, de varios de los protagonistas del periodo previo a la transición democrática. Este hecho, sumado a las propuestas populistas, novedosas para el país, del presidente Portillo, plantea no pocos interrogantes sobre el sentido de estas elecciones y el comportamiento político de los guatemaltecos. Los dos principales partidos de derecha han quedado como dominantes del sistema político, mientras la izquierda constituye la tercera fuerza.

Desde el inicio de la transición democrática en 1986, las cuatro elecciones generales realizadas en Guatemala han permitido el acceso al poder de corrientes políticas diversas, que abarca la centro izquierda y llega hasta la nueva derecha. La transición implicó una nueva Constitución en 1985 y el funcionamiento de autoridades electorales autónomas y no subordinadas al Ejecutivo, que había posibilitado los fraudes electorales anteriores y contribuido a la crisis de legitimidad del régimen político.

Elecciones, transición a la democracia y conflicto armado interno

La participación de algunos protagonistas del periodo anterior a la transición democrática para cargos de elección, en la que fue la última consulta popular del siglo XX, contribuyó a generar dudas sobre el comportamiento político de los guatemaltecos. Este artículo intenta responder a algunas de ellas[1].

VÍCTOR GÁLVEZ BORRELL: sociólogo, profesor universitario e investigador de Flacso-Guatemala.

1. En la década del 70, el fraude electoral se institucionalizó como mecanismo para resolver la alternabilidad en el ejercicio del poder. Se practicó según un modelo que consistía en presentar como «candidato oficial» al ministro de la Defensa de la administración saliente, quien obtenía el primer lugar, pero no la mayoría absoluta de los votos, en elecciones cuyos resultados eran burdamente alterados. El Congreso de la República convalidaba luego el

Palabras clave: elecciones, sistema político, democracia, Guatemala.

La primera administración civil luego de dos décadas de presidentes militares, correspondió al demócrata cristiano Vinicio Cerezo (1986-1990). En las siguientes elecciones asumió otro ex-demócrata cristiano, aunque reconvertido al fundamentalismo protestante, Jorge Serrano Elías (1991-1993). Su gestión estuvo interrumpida por el malogrado autogolpe de Estado que fue impedido por una amplia movilización civil, con el apoyo de una fracción del Ejército; su administración fue completada por Ramiro de León Carpio (1993-1995), ex-procurador de los Derechos Humanos, electo por los diputados para dirimir la crisis en un marco de legalidad. Las elecciones de 1995 se saldaron con el triunfo de Alvaro Arzú Irigoyen (1995-1999), ex-alcalde metropolitano. Finalmente, el nuevo siglo se abrió con la administración de Alfonso Portillo (2000-2004), candidato perdedor en 1995 por escaso margen de votos.

La transición a la democracia estuvo salpicada por abiertos o abortados alzamientos militares y crisis políticas de intensidad diversa (de las cuales el autogolpe de Serrano fue la más grave). Las consultas electorales fueron convocadas por autoridades autónomas e independientes del gobierno central, objeto de observación y vigilancia internacional y en las cuales la decisión de los votantes no estuvo coartada como ocurriera en el pasado. En general fueron catalogadas como elecciones libres y su competitividad se incrementó al concluir el conflicto armado interno en 1996.

Por otra parte, la transición democrática también coexistió con la guerra interna y entre ambas hubo una relación estrecha. La flexibilización del juego político que preparó la transición, se produjo como parte de una estrategia destinada a desarticular a la guerrilla, eliminando algunas de sus principales banderas políticas, como la lucha contra la dictadura y los fraudes electorales. Tuvo, así, un claro propósito contrainsurgente. No obstante, conforme se desarrollaban los procesos políticos, se abrían nuevos espacios de participación, avanzaba la negociación para concluir la guerra y el Ejército se convencía de que su sobrevivencia dependía más de la definición de su nuevo papel en una sociedad democrática que de la continuidad del conflicto armado. El sesgo contrainsurgente de la transición a la democracia se fue debilitando, al tiempo que la misma se legitimaba.

Al suscribirse la paz en 1996, se hizo posible la participación de todas las corrientes políticas que, como las de izquierda, habían estado expresamente proscritas por la ley o por falta de condiciones mínimas de seguridad. Todo ello fue sustentando la democracia electoral. No obstante, la misma se caracterizó, al igual que en otras latitudes, por el paulatino desinterés ciudadano respecto del voto y un generalizado desencanto hacia la política.

---

fraude, al escoger en «elección de segundo grado» a dicho candidato. Esta pauta se practicó en 1974, 1978 y 1982 sin alteración alguna, y puede concluirse que no fue un comportamiento coyuntural sino concebido de antemano y ejecutado según lo previsto.

Una derrota electoral aparentemente inexplicable

Cuando el 27 de diciembre de 1999 se confirmó el triunfo del opositor Portillo, con el 68,2% de los votos en la segunda vuelta, Arzú, apesadumbrado presidente saliente y líder del Partido de Avanzada Nacional (PAN), no se explicaba la razón por la que los grupos sociales supuestamente más beneficiados por su gobierno, le habían dado la espalda al indicar con amargura que «... en donde construimos más obras fue en donde menos votos obtuvimos». Por su parte, en un tono triunfalista Portillo ya había aclarado luego de su victoria parcial en la primera vuelta que «en los lugares más castigados por el conflicto armado interno, fue en donde más votaron por nosotros». Hacía referencia al masivo apoyo que la población de las zonas más devastadas por la guerra (incluyendo la indígena), le habían brindado a él y al partido que lo postuló: el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), creado en 1988 por el general Efraín Ríos Montt, carismático líder que fue jefe de Estado después del golpe de 1982. Ríos Montt reorientó las campañas contrainsurgentes de aquel año que castigaron duramente a la población civil de las regiones de mayoría indígena del país, las mismas que 17 años más tarde, apoyaron a su partido y al candidato civil que él escogió.

¿Qué había sucedido?; ¿por qué la ciudadanía no se dejó convencer por la *obra física* del gobierno, como se quejó amargamente Arzú?; ¿por qué la población indígena que tanto sufrió la violencia de la guerra durante la administración de Ríos Montt, votó mayoritariamente por el partido que éste fundó y por su candidato?; ¿los resultados electorales de 1999 fueron un avance dentro del proceso de democratización o más bien «un retorno al pasado» como lo indicaron algunos críticos?; ¿por qué una derecha (representada en el PAN) fue vencida por otra (la del FRG)?; ¿qué papel jugó la ex-guerrilla reconvertida en fuerza electoral luego de la firma de la paz en 1996?

El PAN y el FRG o el enfrentamiento de la derecha

En las elecciones de 1995, el PAN superó por un escaso 2,5% de los votos en la segunda vuelta al FRG. En los últimos años, ambas formaciones se habían repartido la mayoría de los escaños parlamentarios, convirtiéndose en las fuerzas políticas más votadas. Desde sus inicios, la campaña electoral de 1999 también se polarizó entre los dos partidos. Y aunque se trata de organizaciones de derecha, presentan orígenes y matices distintos. El PAN, fundado en 1989 por Arzú cuando se desempacaba como alcalde metropolitano, es una organización heredera de los viejos líderes anticomunistas de la Guerra Fría, agrupados en torno del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), partido en cuyas filas militaron los dirigentes que encabezaron la invasión de 1954 que derrocara al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán (1950-1954). El sector de la juventud del MLN fundadora del PAN tomó distancia del anticomunismo a ultranza. Se definió como un grupo más moderno, amplio, empresarial (industria azucarera) y de nueva derecha. Su plataforma de acción fue el comité cívico que llevó a la alcaldía metropolitana a Arzú en 1986. Desde

dicha alcaldía, el PAN envió un mensaje de eficiencia y buen gobierno durante los tres periodos en los que controló la municipalidad capitalina (1986-1990, 1991-1995 y 1996-1999) y que volvió a conquistar en 1999, a pesar de su derrota nacional. Sus orígenes y éxitos metropolitanos, le facilitaron implantarse dentro de la pequeña burguesía urbana, pero no logró extenderse a las áreas rurales.

Por su parte, la intención de Ríos Montt al fundar el FRG era alcanzar la presidencia, pese a la prohibición contemplada en la Constitución de 1985 para quienes hubiesen participado en intentonas golpistas o desempeñado la jefatura de Estado como consecuencia de ello. Durante su corta gestión de 18 meses (fue depuesto por la misma cúpula militar que conducía), Ríos Montt redefinió y rediseñó las campañas del Ejército en el altiplano indígena para aislar a la guerrilla y «quitarle el agua al pez» (según la inversión de la metáfora maoísta que las propias fuerzas armadas emplearon). Tal estrategia, que se conoció como la de «tierra arrasada», le valió la condena internacional y la crítica de numerosas agrupaciones humanitarias que lo acusaron de genocidio (que se renueva con la reciente acusación de Rigoberta Menchú ante la justicia española).

Debido a la imposibilidad de inscribirse como candidato presidencial, Ríos Montt escogió para sustituirlo a Portillo, antiguo simpatizante de la guerrilla y exiliado en México, retornado al país en 1989. En aquellos años, Portillo se acercó al Partido Socialista Democrático (PSD) y luego al Partido Democracia Cristiana Guatemalteca (PDCG), del que fue subsecretario, diputado y jefe de bancada, y al que renunció al convertirse en candidato presidencial del FGR en 1995. Derrotado por Arzú por escasa diferencia de votos, volvió a presentarse en las elecciones de 1999. Esta vez la victoria fue indiscutible: en la segunda vuelta del 26 de diciembre obtuvo 36,6% más de votos que el candidato oficialista Oscar Berger, del PAN.

El fin del conflicto armado interno

Al acelerar en 1996 la negociación con la insurgencia, el logro más significativo de la administración del PAN fue la firma definitiva de la paz el mes de diciembre. Lograba así terminar un largo y accidentado proceso iniciado con los Acuerdos de Esquipulas (suscritos por los presidentes centroamericanos en 1987 para pacificar la región). Si bien la negociación había sido producto del trabajo de cuatro administraciones distintas a lo largo de casi una década, a la de Arzú le correspondió el mérito de concluirla.

El fin del conflicto armado interno y la tan publicitada firma de la paz, despertaron grandes expectativas dentro de los grupos más desfavorecidos de la población. A ello siguió un relativo desencanto, en la medida en que el silencio de las armas no se tradujo necesariamente en beneficios inmediatos en términos de mejoramiento de calidad de vida, y se evidenciaron las limitaciones de un Estado tradicionalmente dedicado más a tareas de contrainsur-

gencia que a las sociales (salud, educación, vivienda, etc.). El deterioro del sistema judicial y la escasa capacidad de las nuevas instituciones civiles de investigación criminal (policía y Ministerio Público), unido al crecimiento de la delincuencia común, fundamentaron la imagen de una administración impotente para garantizar la seguridad ciudadana. Parte de las viejas estructuras del terror que funcionaron durante los peores años de la guerra interna, se reconvirtieron para el crimen organizado, beneficiándose de la impunidad y debilidad del Estado. Estos temas fueron hábilmente explotados por la oposición al gobierno del PAN.

Estabilidad macroeconómica y frustración social

El análisis de algunos indicadores macroeconómicos durante el último gobierno del PAN muestra una situación que puede considerarse estable. No se registraron los desequilibrios ni las bruscas oscilaciones que caracterizaron a otras economías del continente y que sufrieron desajustes mayores. Aunque la economía local perdió dinamismo, mantuvo una tendencia al crecimiento en términos reales. La inflación se situó igualmente dentro de márgenes controlables, pues no pasó del 11% en el peor año (1996) para descender a 4,7% (1999), debido en parte a la falta de liquidez y a la contracción del crédito bancario, lo que también permitió mantener un tipo de cambio relativamente controlado, pero tasas elevadas de interés, con las consecuentes críticas de los grupos empresariales.

La devaluación del quetzal frente al dólar fue de aproximadamente 25% entre 1996 y 1999, aunque la mayor proporción del deslizamiento se concentró a finales del último año. En esa fecha se produjeron contradicciones entre las políticas de aumento de liquidez para reactivar el sistema financiero, por una parte, y las destinadas a contrarrestar las presiones sobre el tipo de cambio producto de dicho incremento de liquidez por la otra, lo que originó oscilaciones bruscas. También se agravaron los problemas de varias instituciones financieras en las que sectores de medios, habiendo recibido indemnizaciones o jubilaciones en el proceso de privatización y reducción del sector público, al colocar sus ahorros, perdieron su dinero tras precipitarse las quiebras entre 1998 y 1999[2].

La carga tributaria, estancada por espacio de 20 años, logró cierto incremento aunque sin llegar al compromiso considerado en los acuerdos de paz de elevarla al 12%. El crecimiento de la inversión estatal, uno de los objetivos centrales de la administración del PAN y de los acuerdos, se tradujo en una elevación del déficit fiscal como porcentaje del PIB (0,1% en 1996 y 3,2% en 1999). Para financiarlo, además de la deuda externa e interna, el gobierno recurrió a la privatización de activos del Estado, con lo cual se diferenció de

2. Hasta febrero de 2000 habían entrado en quiebra 12 instituciones financieras cuyas pérdidas podrían representar según estimaciones 400 millones de dólares (*Prensa Libre*, 19/2/00). Muchas de ellas son empresas *off-shore* constituidas en las Bahamas o en las Islas Vírgenes y no reconocidas como tales en el país.

anteriores administraciones, que lo anunciaban aunque sin llegar a concretarlo. El gobierno de Arzú privatizó la telefonía, la energía eléctrica, el ferrocarril y otros servicios menos rentables como el correo, y privilegió la construcción de obras y carreteras a través de concesiones a empresas comerciales. La escasa transparencia con que ello se produjo, contribuyó a muchas de las denuncias de corrupción.

A pesar de este panorama de relativa estabilidad macroeconómica, la ausencia de ajustes salariales unida a la inflación acumulada y al deslizamiento del tipo de cambio, erosionaron la capacidad adquisitiva de la población y crearon malestar y frustración. Muchos de los afectados por las quiebras de las instituciones financieras esperaron vanamente que el gobierno garantizara sus inversiones y se sintieron traicionados por su abandono. A lo anterior se añadió la falta de solidaridad social que mostró el gobierno ante las consecuencias de algunas de sus políticas de modernización, que generaron pérdida o reconversión forzada de empleos y para las cuales no previeron medidas compensatorias, así como los aumentos de las tarifas de las empresas privatizadas, lo que acrecentó las críticas a la «insensibilidad gubernamental».

La campaña electoral y las estrategias discursivas

La amplia diferencia de votos con la que Portillo derrotó a Berger, tanto en la primera como en la segunda vuelta, pueden hacer pensar que el desenlace estaba definido de antemano, desde el inicio mismo de la campaña. Pero ello no fue así. Los resultados dependieron en gran medida de los errores del gobierno, de la incapacidad de la campaña del PAN para revertirlos, de la habilidad de Portillo para explotarlos a través de un discurso agresivo y con rasgos claramente populistas, y de las limitaciones de la izquierda para abrirse paso como «cuña» entre los dos partidos más fuertes de la derecha. Fueron estos los principales elementos de la ecuación de la derrota para unos y de la victoria para otros.

Como partido oficialista, el PAN se centró en demostrar las bondades de la administración de Arzú, y de la gestión de Berger en la municipalidad metropolitana (cargo que ostentaba luego de dos periodos consecutivos). Ello le imprimió al discurso un sesgo conservador, de continuidad y no de cambio ni crítica, simbolizado en la frase «que lo bueno siga para todos», convertida en eslógan del PAN. En la medida en que tanto el presidente saliente como el candidato oficialista se habían desempeñado como alcaldes, estaban convencidos de que la «obra pública» es lo que la población espera del Estado.

Berger no quiso o no pudo tomar la necesaria distancia respecto de Arzú, quien impuso su orientación y hasta los candidatos a diputados. El resultado fue una campaña errática y reactiva, de acuerdo a la dinámica y contenido que imponía Portillo desde la oposición, floja, deslucida y basada más en la tecnología y los medios de comunicación masiva, que en el contacto directo con los electores. Como consecuencia de ello, Berger fue acumulando para sí

los errores del gobierno, sin lograr comunicar sus aciertos y terminó por capitalizar las críticas y denuncias por las alzas en las tarifas de los servicios privatizados, por el aumento del precio de los carburantes, por los actos de corrupción, por el alza del dólar, por la prepotencia de Arzú en sus relaciones con la prensa y hasta por pertenecer y ser el candidato de un partido elitista y «de los ricos». Pero esta acumulación no fue espontánea sino inducida por la hábil campaña del FRG y de su candidato.

Cuando la campaña electoral arrancó formalmente, las preferencias ciudadanas presentaban una *distribución inversa* a la que mostraron siete meses después en las urnas. En efecto, en la primera encuesta sobre intención del voto de mayo de 1999, el candidato oficialista superaba por ocho puntos a Portillo (29% a 21% respectivamente). En junio, los candidatos se situaron en una posición similar, con 25%, y luego Portillo no dejó de crecer hasta alcanzar 68,3% en las elecciones de diciembre. Las encuestas realizadas mes a mes por dos empresas privadas costarricenses, resultaron muy aproximadas en su medición de la intención del electorado e influyeron mucho en la decisión de los votantes, pues fueron utilizadas por el candidato opositor como un instrumento «técnico y neutral» que demostraba su sostenido ascenso.

Portillo utilizó las circunstancias favorables (implantación y estructura organizativa del FRG, la memoria colectiva del electorado, pues había sido candidato en 1995 y su trabajo proselitista previo) para potenciar y hacer llegar un discurso cargado de contenido populista. Así atacó a la administración de Arzú, a los insensibles y a los ricos, a los prepotentes y a los corruptos, a los que se habían olvidado del pueblo –a quienes se comprometió a erradicar del gobierno. Ofreció un cambio instrumentado por «la gente» para hacerla protagonista de su destino, y se presentó como un hombre «venido de abajo», con el mismo origen que el de los electores a los que se dirigía. Todo ello con una habilidad discursiva salpicada de humor y con el timbre de voz que le había valido el sobrenombre de «pollo ronco».

Frente a esta estrategia tuvo poco efecto la propaganda de las obras gubernamentales (las ... «30.000 obras realizadas... y los más de 2.000 kilómetros de carreteras construidas»), que en todo caso fueron denunciadas por Portillo *como de «beneficio para los ricos»*. Por cierto, tampoco le hizo mella su responsabilidad en la muerte de dos mexicanos durante su exilio en los años 80. Portillo aceptó el hecho, alegó legítima defensa, falta de garantías para un juicio justo y aclaró que la causa penal se había cerrado por caducidad del delito. El efecto buscado por el PAN se revirtió y ante varios Portillo apareció como un hombre valiente, llegado el caso capaz de jugarse la vida. El grafiti «Portillo macho, Berger gacho» que adornó los muros de inmuebles de varias ciudades del país, sintetizaba esta valoración. El escándalo no repercutió en la medición de las encuestas, la popularidad de Portillo siguió creciendo; muchos se convencieron de que ya nada impediría su triunfo y otros de que la violencia ocupaba aún una importante posición en la cultura de los guatemaltecos.

Tampoco lograron abrir flancos en la estrategia del FRG las denuncias sobre la presencia en sus filas de ex-militares responsables de violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna, ni la de su mismo secretario general y candidato a diputado, Efraín Ríos Montt, quien asumió como presidente del Congreso en el nuevo gobierno. Dada la poca credibilidad del PAN, se esperaba que tales denuncias las reivindicara la izquierda agrupada en la Alianza Nueva Nación (ANN), coalición formada por la antigua guerrilla reciclada en partido político y por otras expresiones de la izquierda democrática. No obstante, su reciente constitución para las elecciones de 1999, la actitud acrítica que caracterizó a la ex-guerrilla frente al gobierno del PAN desde la firma de los acuerdos de paz y su debilidad organizativa, explican en parte por qué no lo hizo.

Participación, abstención y sentido de los resultados electorales

Las elecciones generales de 1999 fueron las primeras celebradas luego del fin de la guerra. Ello hacía esperar un incremento en la participación electoral, al contrario del descenso que venía registrándose desde el inicio de la transición democrática. Dos hechos confirmaron las expectativas. Por una parte, un aumento efectivo en la asistencia a las urnas derivada del mayor interés por participar y del grado de polarización de la campaña (ver cuadro).

Guatemala, participación electoral 1985-1999
(% del padrón)

	1985	1990-1991	1995-1996	1999
Primera vuelta	69,2	56,4	46,8	53,9
Segunda vuelta	65,3	45,0	37,0	40,3

Fuente: Tribunal Supremo Electoral.

Por otra parte, la información del Tribunal Supremo Electoral (que dicho órgano se había cuidado de guardar) sobre un padrón electoral «inflado» por los muertos no declarados y los migrantes permanentes, principalmente en Estados Unidos. Algunas estimaciones calculan que de los 4,4 millones de empadronados, los fallecidos y residentes en el extranjero («mojados») podrían acercarse al millón y medio de personas. Ello elevaría los porcentajes de participación electoral y los colocaría en dimensiones comparables con la de otros países del continente.

Los datos muestran que en la primera vuelta el FRG estuvo cerca de obtener la mayoría absoluta de votos, con el 47,7%, mientras que en la segunda, alcanzó 68,3%. El PAN perdió en esta última 17% de los votos que había alcanzado en la primera. El FRG ganó en todo el país en la primera vuelta, salvo en el distrito metropolitano. Ello le facilitó al PAN conquistar la alcaldía por cuarto periodo consecutivo. En la segunda vuelta sin embargo, el FRG se afir-

mó como vencedor en todo el país y dejó de ser así un partido de simpatía rural. Por su parte, la izquierda representada en la ANN obtuvo 12,3% de los votos y se situó como la tercera fuerza electoral. Como resultado de lo anterior, de los 113 escaños del Congreso, al FRG le correspondieron 63, al PAN 37, a la ANN 9 y los 4 restantes a formaciones menores (incluyendo la Democracia Cristiana). El nuevo partido de gobierno cuenta con la mayoría parlamentaria.

Como Portillo anunciara durante su campaña, la mayoría de la población de las áreas más castigadas por la guerra, incluyendo la indígena, votó por él y su partido. Es posible que mucha de esta gente no identificara al FRG ni a sus dirigentes con el conflicto por desconocimiento, por el paso del tiempo o porque tal relación nunca les pareció explícita y la izquierda no logró aclararla. No obstante, en 11,1% de los municipios de los nueve departamentos del país con población de mayoría maya, la ANN obtuvo más votos que el PAN y el FRG. El triunfo de éste obedeció a un efecto acumulativo y no a una sola causa. Fue evidente el «voto castigo» a la administración del PAN que el FRG y no otro partido logró capitalizar, como consecuencia de su mayor implantación organizativa y del trabajo de su candidato desde 1996, cuyo liderazgo natural fue determinante. Y si en las elecciones de 1990 (en las que Serrano Elías resultó vencedor) se consideró que Ríos Montt le había «trasladado» parte de sus simpatías, carisma y voto «evangélico», y que hizo otro tanto en las de 1995-1996 en favor de Portillo, la campaña de 1999 se desarrolló fundamentalmente sobre las espaldas de este último y no sobre las del secretario del FRG y candidato a diputado[3].

El liderazgo de Portillo permitió en muchos casos un curioso «desdoblamiento» entre la personalidad del candidato y la del partido que lo postuló, lo que justificó que seguidores de izquierda afirmaran «estar con Portillo pero no con el FRG» –aclaración también esgrimida para después justificar su participación en el nuevo gobierno.

Las condiciones en las que se desarrolló la campaña, el incremento relativo en la participación de votantes, la presencia de observadores internacionales y la elevada proporción de sufragios con la que ganó la oposición, confirman que los guatemaltecos volvieron a escoger en las urnas, como lo han hecho desde 1985, al equipo que consideraron satisfacería sus expectativas políticas. En este sentido, la ciudadanía ha expresado libremente sus preferencias, aunque a través de ellas seleccione a personajes significativos del periodo anterior a la transición democrática o con antecedentes golpistas (como ha sucedido por ejemplo con Banzer en Bolivia, Alemán en Nicaragua o Chávez en Venezuela). Las dudas derivan de quienes suponen que la transición a la democracia debería reflejarse en el comportamiento electoral de los ciudada-

3. En la campaña de 1995-1996 uno de los eslóganes más usados fue «Portillo a la presidencia, Ríos Montt al poder», que no se empleó en la de 1999. Por el contrario, en esta última Ríos Montt se condujo más bien con bajo perfil, sobre todo en el occidente indígena.

nos en favor de nuevas propuestas, de otra ética y de otros liderazgos, o bien de quienes estiman que la cultura política aún no se ha desembarazado suficientemente de su lastre autoritario. En todo caso, son estos resultados los que ponen a prueba la misma democracia.

Las perspectivas de la nueva administración

Tomando en cuenta que el nuevo presidente no es el líder de su partido, sino Ríos Montt, una de las principales dudas sobre el porvenir de la administración de Portillo (2000-2004) se ha centrado en las posibilidades de cohabitación entre ambos. Ello podría ser fuente de tensiones, que hasta el momento no se han producido, y afectar la gobernabilidad como ocurrió en el pasado, durante la administración de Serrano por ejemplo, cuando el Ejecutivo no tuvo mayoría en la Asamblea[4]. Esta dualidad de la administración se evidencia en la composición del gabinete, que tardó en darse a conocer y muestra sobre 12 ministerios y 10 secretarías, que 4 ministros y 3 secretarios pertenecen al FRG, mientras que el resto es en mayor o menor medida de la esfera de influencia de Portillo.

Dentro de esta dualidad se sitúa igualmente el tema de la presencia de la *izquierda* en el gobierno, fenómeno que ya se había producido durante la administración del PAN pero que ahora parece haber crecido, con 2 ministros y 2 secretarios, y sobre todo con la presencia de la mayoría de funcionarios medios ubicados en algunas dependencias. No se trata sin embargo de una coalición, sino de personas con pasado de izquierda que participan a título personal y no orgánico, por amistad y confianza con el presidente y que contribuyen a una imagen pluralista de su gobierno.

En términos de imagen ocurrió algo similar en las relaciones con el Ejército, cuando el presidente nombró como ministro de Defensa a un coronel –provocando no por razones legales sino por tradición el retiro de 20 generales que no deseaban depender formalmente de un militar de menor grado, algunos de los cuales aceptaron cargos diplomáticos en el exterior. De igual forma, cuando (con el apoyo de Ríos Montt) impulsó la reforma legal para que un civil pueda acceder a dicho ministerio (lo que es visto como un paso importante en la desmilitarización de la sociedad, aunque sea una práctica de larga data en otros países), y cuando dio un impulso a la investigación sobre el asesinato de monseñor Juan José Gerardi, lo que produjo el arresto de varios militares sospechosos[5]. Tales circunstancias generaron reacciones en el esta-

4. Durante la campaña, el propio candidato Portillo había recomendado a sus electores, integrar un Congreso más plural para evitar una excesiva concentración del poder. Otros líderes del FRG por el contrario, llamaban al voto masivo a favor de sus candidatos para todos los puestos de elección.

5. Monseñor Gerardi era el responsable del proyecto diocesano de la memoria histórica, había sido obispo del departamento de El Quiché, uno de los más afectados por la violencia de la guerra y del que tuvo que salir al exilio. Su muerte se produjo en la casa parroquial de su iglesia, en abril de 1998, pocos días después de la presentación del informe de dicho

mento armado, sintetizadas en las declaraciones de un general, que pasó a retiro, al indicar que el presidente «... quiere llamar la atención y demostrar que tiene el control del Ejército» (*Prensa Libre*, 20/2/00). Y aunque no se trata de hechos contundentes, estas decisiones mejoran la imagen internacional del nuevo gobierno y tienen un valor simbólico en la afirmación del poder civil sobre las fuerzas armadas.

En un país con una fuerte tradición centralista, habituado a que todo lo resuelva «el señor presidente», dos características de la administración de Portillo llaman la atención transcurridos los 60 primeros días de su asunción: el voluntarismo del mandatario y los sesgos populistas de su gestión. Algunas de las acciones ya mencionadas y que han mejorado la imagen del gobierno, corresponden a la primera de tales características. Otras sin embargo, como el aumento salarial a los trabajadores públicos y privados que también se inscriben en tal voluntarismo, no resultaron tan exitosas, ya que la principal gremial de empresarios se opuso y la situación se encuentra aún estancada.

Por su parte el populismo como fuente de legitimación del poder, es una experiencia poco conocida en Guatemala. El poder oligárquico que se ejerció hasta la mitad del siglo XX y la restauración conservadora que se extendió de 1954 a 1985, no le resultaron propicios. Es un recurso que encuentra rápido apoyo entre masas depauperadas, humilladas y frustradas pero que presenta también limitaciones y riesgos, sobre todo si no existen organizaciones fuertes dentro de la sociedad civil, capaces de apoyar la identificación y recolección de las demandas y orientar su satisfacción, para evitar así una desordenada movilización de intereses, o en su defecto, la reversión rápida de los apoyos. Dentro de este contexto, el anuncio por el gobierno de un pacto de gobernabilidad (que ya había sido ofrecido durante la campaña) abriría una opción de participación y de presencia más ordenada y constructiva de los intereses sectoriales y/o gremiales de los grupos sociales.

El pacto y otros mecanismos como los consejos de desarrollo y los cabildos abiertos permitirían recoger la presencia de tales intereses, hacer funcional una comunicación de dos vías entre gobierno y organizaciones sociales, con lo cual se transitaría en dirección a una democracia más participativa dentro del estilo de gestión de la actual administración, pero sin los riesgos del desbordamiento que podría producir el fenómeno populista. No obstante, se conoce poco sobre la naturaleza y mecanismos de dicho pacto. Ello contribuye a la confusión de algunos y a la incertidumbre de otros. Los meses por venir deberían aclarar más el panorama político del país.

Ciudad de Guatemala, marzo de 2000

---

proyecto, en el que se responsabiliza al Ejército de las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.